

La COP30 celebrada en Belém do Pará representa un hito dentro del ciclo reciente de negociaciones climáticas, no sólo por su localización en el corazón de la Amazonia sino también por la complejidad del momento geopolítico en el que se desarrolla.

El informe de la Fundación T.E.A. destaca que la conferencia se movió entre avances formales, tensiones políticas y un creciente esfuerzo por reforzar la narrativa de “implementación”, aunque persisten contradicciones entre la urgencia climática y la dispersión de intereses nacionales.

El denominado Paquete Belém, que reúne 29 decisiones adoptadas por consenso, es presentado como un intento de ordenar las prioridades internacionales hacia 2035, pero su contenido revela tanto logros relevantes como vacíos y ambigüedades que condicionarán la siguiente etapa del régimen climático.

En cuanto a los acuerdos alcanzados, el informe subraya la aprobación de la Meta Global de Adaptación y la definición de 59 indicadores destinados a orientar a los países hacia un marco común de evaluación.

La creación del Acelerador Global de Implementación, del Mecanismo para una Transición Justa y de iniciativas para movilizar financiamiento climático muestra un esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y financieras de las Partes. A esto se suma la ampliación del Plan de Acción de Género y la introducción de un nuevo Plan de Acción de Salud, lo que evidencia un reconocimiento explícito de la dimensión social de la crisis climática y la necesidad de articular políticas transversales. Del mismo modo, el lanzamiento de un diálogo sobre clima y comercio apunta a integrar la dimensión económica del problema, en un contexto donde las tensiones comerciales podrían acentuarse bajo la excusa de medidas ambientales.

Sin embargo, el informe señala que estos avances conviven con desacuerdos estructurales que reafirman la fragmentación del sistema multilateral. **La disputa más visible se produjo en torno a los indicadores de adaptación: varias delegaciones criticaron la falta de claridad técnica, la inoperabilidad de algunos indicadores y un proceso de negociación percibido como poco transparente.** Esto culminó en objeciones formales en el plenario final, dejando en evidencia problemas de procedimiento y gobernanza al interior de la COP. La tensión no se limitó a lo técnico, sino que también se proyectó sobre las relaciones diplomáticas entre bloques, particularmente entre países desarrollados y países del Sur global, cuyas prioridades difieren en torno al financiamiento y la naturaleza de los compromisos que deben asumir.

La dimensión de financiamiento climático aparece como uno de los ejes más desarrollados del documento, en parte porque **se reconoce que la transición energética, la adaptación y la mitigación sólo podrán materializarse mediante un apoyo financiero sostenido, predecible y accesible.** El compromiso de movilizar 1,3 billones de dólares anuales hacia 2035 constituye una señal importante, aunque el informe advierte que la cifra, en sí misma, no resuelve los problemas fundamentales de gobernanza financiera.

La creación de iniciativas como FINI y de marcos de transparencia apunta a mejorar la trazabilidad y credibilidad del financiamiento. No obstante, las tensiones Norte–Sur persisten: mientras los países desarrollados promueven un mayor protagonismo del sector privado y de los mecanismos mixtos de inversión, los países de ingresos bajos y medios reclaman financiamiento público directo, tasas de interés más bajas y reformas profundas en la arquitectura financiera internacional. **La brecha entre necesidades y desembolsos reales sigue siendo un desafío central que la COP30 no logra resolver de forma sustantiva.**

Otro punto que adquiere relevancia analítica es la perspectiva de género, que en esta COP adquiere una centralidad inédita. El informe documenta cómo las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes, rurales y las recicladoras urbanas— enfrentan mayores riesgos climáticos, pero también desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los territorios y en la economía circular.

La ampliación del Plan de Acción de Género representa un avance institucional, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad real de los Estados para traducir estos compromisos en políticas públicas efectivas. A ello se suma **el papel emergente del litigio climático liderado por mujeres jóvenes, que evidencia una tendencia hacia la judicialización de la acción climática cuando los instrumentos diplomáticos resultan insuficientes**. La COP30, en este sentido, no sólo reconoce la dimensión de género, sino que la articula con debates sobre salud, trabajo decente y justicia climática, anticipando una agenda más integrada para los próximos años.

El punto más controvertido de la conferencia, según el análisis del informe, fue la transición energética. A pesar de que la ciencia climática señala de manera inequívoca la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, la COP30 no logró incorporar un lenguaje vinculante que estableciera un compromiso claro y colectivo. La propuesta de una hoja de ruta elaborada por la presidencia brasileña fue presentada fuera del ámbito formal de negociación, lo cual provocó críticas de numerosos países que reclamaban un proceso más transparente y mandatos explícitos dentro del texto oficial. Esta ausencia de acuerdo refleja la persistente resistencia de numerosos Estados cuyas economías dependen de la explotación fósil, así como la falta de consenso en torno a los tiempos, instrumentos y responsabilidades asociadas a la transición.

El informe muestra que, incluso cuando existen coincidencias discursivas sobre la necesidad de acelerar la transición energética, los compromisos específicos siguen siendo insuficientes y altamente condicionados por factores políticos, económicos y geoestratégicos. El cierre conflictivo del plenario, marcado por acusaciones de falta de transparencia y objeciones no reconocidas, refuerza la percepción de que la COP30 se desarrolló bajo una gobernanza frágil y con fuertes tensiones internas. Esta situación plantea preguntas relevantes sobre la legitimidad de los procesos de negociación, la distribución del poder entre delegaciones y la capacidad de las estructuras multilaterales para gestionar desacuerdos profundos en un contexto de crisis climática acelerada. Si bien el Paquete Belém se presenta como el inicio de una década de implementación, el informe deja entrever que la verdadera efectividad de estos acuerdos dependerá menos de las decisiones adoptadas en la conferencia y más de la capacidad política y económica de cada país para traducirlas en acciones concretas.

En síntesis, la versión analítica del informe de la Fundación T.E.A. sugiere que la COP30 combinó progresos institucionales, innovaciones normativas y reconocimientos sociales relevantes, con tensiones estructurales aún no resueltas en torno a la gobernanza climática, el financiamiento, la equidad y la transición energética. **La conferencia logró consolidar ciertos consensos mínimos, especialmente en adaptación y financiamiento, pero dejó pendientes los temas más sensibles, como la eliminación progresiva de combustibles fósiles y la modificación de la arquitectura financiera global.** A su vez, la centralidad otorgada a la Amazonia y a la justicia climática revela un cambio discursivo importante, aunque aún no plenamente traducido en compromisos operativos.

En definitiva, **la COP30 aparece como un punto de inflexión: no tanto por la solidez de sus decisiones, sino por la confrontación explícita entre visiones divergentes sobre el modelo de desarrollo, la responsabilidad histórica y las rutas de transición.** El desafío hacia adelante será transformar los acuerdos formales en transformaciones económicas reales, con políticas orientadas a la equidad, la sostenibilidad y la protección de las poblaciones más vulnerables. La conferencia deja así un legado ambivalente: un marco institucional renovado y ambicioso, pero acompañado de tensiones profundas que anticipan negociaciones igualmente complejas en los próximos años.